

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META**

Villavicencio, octubre diecinueve ( 19 ) de dos mil diecisiete (2017).

**REFERENCIA:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

**DEMANDANTE:** DAYANA FERNANDA LONDOÑO PEREZ

**DEMANDADO:** MUNICIPIO DE MITU

**MAGISTRADA:** TERESA HERRERA ANDRADE

**EXPEDIENTE:** 50001-33-33-007-2016-00372-01

Resuelve la Sala, en 2ª instancia, el recurso de apelación formulado por el demandante contra el auto del 16 de enero de 2017, emitido por el **JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO**, mediante el cual declaró el **RECHAZO DE LA DEMANDA** por haber operado el fenómeno de caducidad.

**I. ANTECEDENTES**

**PROVIDENCIA APELADA**

El A-Quo mediante **auto del 16 de enero de 2017**, dispuso rechazar la demanda por haber operado el fenómeno de **CADUCIDAD**, a partir de la notificación del Decreto N° 20, por medio del cual se revoca el Decreto No. 69, por el cual se nombre en provisionalidad a la tutelante y es objeto de la acción de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**; que como el Decreto N° 20, fue notificado el 29 de enero de 2016, el termino de caducidad empieza a contarse a partir del 30 de enero de 2016, finalizando el día 30 de mayo de 2016, radicando la solicitud de conciliación extrajudicial el día 08 de junio de 2016, cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad, por lo que el termino no fue suspendido y presentó la demanda, el día 07 de septiembre de 2016, estando más que vencida la oportunidad de interponerla.

Precisó que la orden dictada por el **JUZGADO PRIMERO PROMISCOU MUNICIPAL DE MITÚ**, en virtud de la acción de tutela que le amparo el derecho de

estabilidad laboral reforzada a la demandante, como mecanismo de protección transitorio para evitar, un perjuicio irremediable, no realizó una manifestación expresa respecto a la suspensión de los efectos jurídicos y administrativos del acto acusado, así que no debe entenderse que en cumplimiento de la orden de tutela se extienda la posibilidad tácita de ampliar el término de caducidad para demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

Finaliza diciendo que, el Decreto N° 21 de 2016, que reintegro a la actora, no configuró el decaimiento del acto administrativo anterior, ni fue objeto de revocatoria directa o anulación judicial, por lo que recobro su ejecutoriedad.

### **RECURSO DE APELACIÓN**

Inconforme con la anterior decisión, la demandante la apeló argumentando que la Jueza **A QUO**, no contabilizó el término de caducidad desde el fallo de tutela, desconociendo el artículo 8, del Decreto 2591 de 1991, sino a partir de la expedición del acto atacado.

Afirma que radico ante la **PROCURADURÍA JUDICIAL DELEGADA PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE VILLAVICENCIO** solicitud de conciliación dentro de los cuatro meses que otorga el Decreto 2591 de 1991, en su artículo 8, y este Ente se tomó 3 meses para realizar la audiencia de conciliación, demora que no le es imputable a la actora, y los términos se suspenden mientras se adelanta la diligencia de conciliación. Cita Jurisprudencia al respecto.

Concluye que no ha operado el fenómeno de **CADUCIDAD**, pues la demanda la presentó conforme lo señala la norma y solicita se revoque la decisión del A Quo.-

### **II. CONSIDERACIONES**

#### **COMPETENCIA:**

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 153 del C.P.A.C.A., este Tribunal es competente para conocer, en 2ª Instancia, de los recursos de apelación contra los autos susceptibles que expiden los **JUECES ADMINISTRATIVOS** por ser el superior funcional.

## PROBLEMA JURIDICO

El asunto se centra en decidir, si ha operado la caducidad del medio de control **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** interpuesto en contra de la **MUNICIPIO DE MITU**. (fls. 68-70 cuad. 1ª inst.)

## CASO CONCRETO

Según el A Quo el termino se empieza a contar a partir de la notificación del Decreto 20, de **29 de enero del 2016**, a la demandante, **DAYANA FERNANDA LONDOÑO PEREZ**, la que se realizó el mismo día de su expedición, ( fl. 14 del cuad. ppal.).

Para este Juez colegiado no es acertada la contabilización hecha por la funcionaria de primera instancia, quien desconoce lo señalado en el inciso 3 del artículo 8 del Decreto 2591 de 1991, que concede un término de 4 meses al tuteante, contados a partir del fallo de tutela, para instaurar la respectiva acción ordinaria ante el Juez natural.

Así lo ha precisado, H. **CONSEJO DE ESTADO**:

**“Dado que la finalidad de la tutela como mecanismo transitorio no es sustituir los procesos ordinarios o especiales y tampoco a las autoridades competentes para fallar en el fondo, resultaba imperioso, en aras de garantizar la certeza de los derechos y la seguridad jurídica, que el legislador precaviera la posibilidad de que el fallo y el derecho fundamental tutelado, no quedaran burlados o resultaran ineficaces a pesar de haberse intentado la acción de tutela dentro del término de caducidad de la acción principal.**

**En este orden de ideas, la caducidad especial corresponde a un término concedido al afectado para garantizar su efectivo acceso a la justicia y de esta manera impedir dejar en suspenso el derecho pretendido, sólo cautelar y transitoriamente protegido mediante la acción de tutela.**

(...)

**De este modo encuentra amplia justificación que el artículo 8º dispusiera que debe intentarse la acción ordinaria “en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela”, so pena de que cesen sus efectos. Así las cosas, a partir del fallo de tutela el beneficiado tendrá siempre un plazo de cuatro meses contado a partir de éste para intentar el medio de defensa judicial que corresponda; ahora, si la acción principal tiene un término de caducidad mayor - aún producido el decaimiento de la protección tutelar -, se podrá hacer uso del resto del término otorgado por la ley para iniciarla”<sup>1</sup>**

El Tribunal de cierre de esta jurisdicción, también ha dicho que la acción de tutela es un mecanismo excepcional que, en manera alguna, releva a los accionantes de atender las reglas especiales que consagra el ordenamiento jurídico frente a los distintos medios de control y menos aún puede servir de excusa para

<sup>1</sup> Consejo de Estado, Rad: IJ-006, diez (10) de Mayo de 1999, M.P: Flavio Augusto Rodríguez Arce.

Expediente: **50001-33-33-007-2016-00372-01**

Referencia: **NYR**

Demandante: **DAYANA FERNANDA LONDOÑO PEREZ**

Demandado: **MUNICIPIO DE MITÚ**

utilizar los instrumentos por fuera del plazo señalado para que expire su ejercicio y que el término máximo de cuatro meses debe entenderse que con la presentación de la solicitud tutela, **se suspende el término de caducidad de la acción principal**, por lo que el beneficiado con la orden debe ejercer el medio de control correspondiente **dentro del plazo que falte para que opere la caducidad de éste.**<sup>2</sup>

La accionante, demanda el Decreto No. 020, del 29 de enero de 2016, con el que se revoca el Decreto 069 del 26 de noviembre de 2015, demandante, por medio del cual se nombró a la actora en el cargo de **SECRETARIA** de la Inspección municipal, nivel asistencial, código 440, grado 07, en la planta de personal de la **ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MITU**, ( fls. 11 al 13 del cuad. ppal.); esta decisión fue notificada a la demandante, **DAYANA FERNANDA LONDOÑO PEREZ**, mismo día de su expedición, el **29 de enero de 2016** ( fl. 14 del cuad. ppal.); el término de los 4 meses que tenía para ejercer el medio de control de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**, empieza al día siguiente, **30 de enero de 2016**, hasta el **30 de mayo de 2016**; pero instauró la acción de tutela el **8 de febrero de 2016** ( fl. 33 del cuad. ppal.) y la decisión se profirió el **15 de febrero de 2016**, ( fls. 49 al 56 cuad. ppal.), habiendo transcurrido **8 días**, de los 4 meses que tenía para instaurar el medio de control, (**31 de enero al 7 de febrero de 2016**) quedando **3 meses y 22 días**, iniciando el conteo al día siguiente; es decir, el **16 de febrero de 2016**, y culmina el **7 de junio** de la misma anualidad.

La demandante presenta solicitud de conciliación extrajudicial, el día **8 de junio de 2016**, ante la **PROCURADURÍA 94 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS** (fl.63 cuad. 1 inst.), cuando ya había fenecido el término de los 4 meses y fue radicada el día **07 de septiembre del 2016** (fl.65 cuad. 1 inst.), por lo que evidentemente se encuentra caducada la acción.

Así las cosas, la Sala **CONFIRMARÁ** la decisión proferida el 16 de enero de 2017 por el **JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO**, en el sentido de **RECHAZAR** la demanda, por haber operado la **CADUCIDAD**.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META**,

---

<sup>2</sup> Auto de fecha 30 de octubre de 2014, P.: LUCY JEANNETTE BERMUDEZ BERMUDEZ  
Radicación número: 47001-23-33-000-2013-00147-02 Consejo de Estado

**RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** el auto del **16 de enero de 2017**, proferido por el **JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO**, mediante el cual rechazo la demanda por haber operado el fenómeno de **CADUCIDAD**.

**SEGUNDO:** En firme la presente providencia, **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen, previa **DESANOTACIÓN** en los respectivos libros.

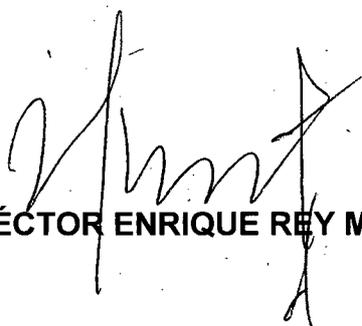
**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

Estudiado y aprobado en Sala de Decisión de la fecha, mediante acta N°

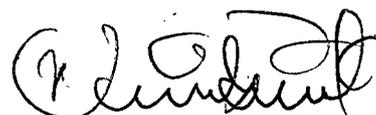
044.-



**TERESA HERRERA ANDRADE**



**HÉCTOR ENRIQUE REY MORENO**



**NILCE BONILLA ESCOBAR**